

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 10 de Diciembre de 1863.

Presidencia del señor Delgado.

Abierta la sesion á las dos de la tarde con 12 señores, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta de una nota del Ministerio de Gobierno, consultando el modo de proceder sobre la renovación de las Municipalidades en las provincias en que ha habido elecciones duales. Se pasó á la comision del señor Zarate.

De otra del señor Senador suplente D. Lorenzo Sologuren, en que pide le tenga presente al calificar las actas del Callao, el derecho que le asiste, para representar á esa provincia, á falta del Senador propietario. Se mandó pasar á la comision calificadora de las actas electorales.

Se dió igualmente cuenta de una consulta del colegio provincial del cercado del Cuzco, sobre si es valida la eleccion de Municipales hecha en la persona del D. D. José Ancelmo Alvares, siendo cirujano del Ejército, y medico titular. Posó á la misma comision.

Tambien se dió cuenta de un escrito de D. Felis Vargas, á nombre del D. D. Francisco Arana, acompañando un certificado para acreditar que el Dr. Serpa no tiene la edad competente para ser electo Senador. Se mando pasar á la misma comision.

Asi mismo se dió cuenta de las actas de Piura, Ayacoba, Payta, Lima 3ª acta de Canta, Huauuco, Andahuaylas, Huancavelica, Jauja, Huanta, Tacna, Laya, Chichlayo.

Despues de lo cual se levantó la sesion.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 14 de Diciembre.

Presidencia del señor Delgado.

Se abrió la sesion á las dos de la tarde, con 10 señores, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta de una nota del Ministerio de Justicia pidiendo permiso para que el señor Lavalle abuse un interrogatorio ante el juez de derecho de esta capital D. D. Manuel Olivares, y se acordó asi, estando llano dicho señor Lavalle.

Se dió cuenta y pusieron á la órden del dia los dictámenes siguientes.

19 Del H. señor Zarate sobre la consulta del Ejecutivo solicitando una regla fija para proceder en la instalacion de las municipalidades:

29 Del H. señor Lizarraga sobre la solicitud de D. Sebastian Destre, pidiendo la remocion del Prefecto de Junin coronel D. Bernardo Bermudez.

Se leyó una nota del señor Ministro de Gobierno en la que niega á la Comision Permanente el derecho de pedir las actas de los colegios electorales. Se pasó á la comision del H. señor Pino, el que por indicacion de algunos señores ofreció emitir su dictámen dentro de 24 horas.

Se dió igualmente cuenta de una solicitud D. Pedro P. Chirinos, en que pide se agregue su recurso á las actas de elecciones de la provincia de

Condesuyos. Se mandó pasar á la comision especial nombrada con este objeto.

ORDEN DEL DIA.

Se puso en debate el siguiente dictámen.

Señor.

La improvisacion de elecciones duales en las mas de las provincias de la República, es una triste realidad que se presenta á los ojos de todos. No han sido bastante á contener esta aberracion, ni las bien calculadas disposiciones que garantizan al ciudadano el libre ejercicio del derecho político de sufragio, ni la solemne y explicita reprobacion del último Congreso, ni la indignacion con que la opinion pública juzga de tan pernicioso abuso. A medida que se progresa en ideas sociales y se difunden ellas, van tambien en lamentable desarrollo la ambicion y el egoismo, pero no esa ambicion noble y generosa que jamás traspasa los límites de la dignidad que el hombre se debe así mismo y á la sociedad, y los respetos que se merece la ley, sin cuya observancia la adquisicion del mas alto titulo no deja de resentirse de su origen impuro, injusto atentatorio. Ha llegado el descaro al extremo de hacer irrisorio y objeto de ludibrio el voto popular con los arduos, fraudes, suplantaciones y falsificaciones que se ponen en juego con mengua de la civilizacion, y con perjuicio de la inocencia de las masas que se las encamina á la corrupcion. Tal es hoy nuestro sistema electoral, base y fundamento de los poderes políticos.

Felizmente para la moral, la libertad y civilizacion, este estado anómalo es fugaz y transitorio, y procediendo nada mas que de la aspiracion de tener parte en la cosa pública, no afecta seriamente el órden fundamental y las instituciones, ni compromete la tranquilidad pública.

No es del caso señalar ahora las causas de semejante estravío, ni indicar los medios mas apropiados para estirpar el mal que cunde. La próxima legislatura secundada por la eficaz accion del Gobierno, con voluntad energica, sabrá devolverle al sufragio libre la importancia que se le ha tratado menguar.

Mientras tanto, á pesar de la vijilancia y celo de esta H. corporacion, tiene que subsistir el fenomeno de la dualidad de los colegios electorales, continuando tambien el estado actual de las municipalidades existentes, no obstante el artículo 40 de la ley de elecciones y el interes del Gobierno por su cumplimiento.

Siendo las Cámaras legislativas las únicas competentes para decidir la nulidad ó validez de las elecciones; y no principiando la Comision Permanente el examen y escrutinio de las actas de eleccion de Senadores, no puede ella ni prejuzgar de una manera directa sobre las municipalidades elegidas, llamadas á funcionar desde 19 de Enero próximo, ni traspasar sus atribuciones constitucionales, avocandose el conocimiento de lo que expresamente no le está concedido.

Por consiguiente, la resolucion que desea obtener el señor Ministro de Gobierno en su oficio que motiva este informe, no puede tener lugar por parte de esta corporacion. Ademas, el Gobierno no la necesita para llenar sus deberes y hacer cumplir las leyes: tiene precedentes muy terminantes que pue-

den servirle de norte, y aun cuando asi no fuera, la razon, la política y la prudencia indican claramente la medida que debe adoptar, la única menos mala, de menos inconvenientes en las actuales circunstancias. Desde que existen dos elecciones con iguales pretenciones de legitimidad, no hay todavía la autoridad que debe fallar sobre ellas, y no siendo admisible la monstruosidad de que ambas funcionen simultáneamente, ni serle dado al Gobierno preferir á ninguna, porque esto importaría ya un reconocimiento que hiciera dudar de su imparcialidad, nada mas natural y conforme á la razon y principio de analogia, que conservar las cosas *in statu quo*.

En virtud de lo espuesto, vuestra comision especial os presenta por conclusion: que, si este informe mereciere vuestra aprobacion, mandeis se conteste al señor Ministro oficiante con trascripcion de el.

Sala de la comision.—Lima, Diciembre 12 de 1863.

Manuel A. Zarate.

El señor Cárdenas.

Yo encuentro el dictámen juicioso y bien fundado; pero con el vacío de no tener parte resolutiva, que es la que debe aprobar la comision. Ademas, en mi concepto, no es legal que deban continuar funcionando las municipalidades hasta la próxima legislatura, para q'el Congreso resuelva las cuestiones de dualidades de los colegios electorales; opino por el contrario, que deben ser reemplazadas las municipalidades por las que hayan sido elejidas por los colegios de provincia que resulten aprobados por la Comision Permanente; sancion legal suficiente para que puedan ser reemplazados esos cuerpos. Tengo la conviccion intima, como la tendrá cualquiera que haya seguido paso á paso la marcha de las elecciones de provincia, que la mayor parte de las dualidades de Diputados y Senadores, no ha tenido otro objeto que ganar los puestos municipales ó conservarlos; razon por la cual se ha visto cuanta parcialidad ha habido por parte de algunas municipalidades en la eleccion de representantes.

Acceptando la opinion del señor Zarate, resultarian triunfando la intriga, y la ilegalidad, resultarian triunfando los atentados cometidos abusando del puesto municipal, para corromper el sufragio. ¿Por qué? porque esas municipalidades reelejidas, ó elejidas valiendose de medios reprobados subsistirán un periodo mas, en vez de ser reemplazadas el 1º de Enero como manda la ley. Desde luego, hasta que la Comision Permanente no resuelva nada sobre elecciones, tienen que continuar las municipalidades actuales; porque los cargos públicos, como este, no vacan mientras el llamado á reemplazar al que lo ejerza no tome posesion del cargo. De aquí al 1º de Enero tenemos tiempo de sobra para hacer la regulacion, y escrutinio y de las actas de la eleccion de Senadores, para proclamar á los que hayan sido elegidos, puesto que las Cámaras á su vez en solo 15 dias de juntas preparatorias, lo tienen tambien para calificar todas las actas de la República. En Enero se desembarazará el Gobierno de la cuestion y entrará en el camino llano, sin mas que atenerse á las resoluciones de este cuerpo; es decir, sin hacer otra cosa que aceptar las Municipalidades elejidas por los colegios de provincia que la Comision Permanente dé como legales.

El señor Zarate.

Satisfaré las observaciones del señor Cárdenas. Con respeto á la primera de que el dictámen no tiene parte dispositiva, diré que de intento se ha omitido colocar esa parte, directa, espresamente; pero claramente se indica, en el primer párrafo del dictámen, que la resolucion pedida por el Gobierno, para que sirva de norma en la renovacion de las municipalidades, no puede tener lugar ahora. Las razones en que se funda son que no puede juzgar la Comision directamente acerca de la eleccion de las municipalidades, porque está limitada únicamente á juzgar respecto de la eleccion de Senadores, y no puede extenderse á la eleccion de municipales que es un acto enteramente distinto; y ademas porque todavía no tiene todas las actas electorales. Solo 10 dias útiles le quedan á la comision para expedir con oportunidad la resolucion que se le pide; y en esos 10 dias no puede como quiere el señor Cárdenas decidir de todas las actas de la República. Yo creo que esto basta para que el señor Cardenas se convenza de que no es posible que se dé una resolucion en el sentido que indica su Señoría, porque no es posible que se examinen todas las actas en solo diez dias.

Ademas la Comision no es autoridad competente para fallar sobre las elecciones en general, pues ellas tienen que decidirse por el Cuerpo Legislativo; y habiendo municipales duales con iguales pretensiones, claro es que la Municipalidad que se halla en posesion y que reúne la confianza pública para el ejercicio de esas funciones, es la que debe continuar hasta que venga la que deba reemplazarla, pero ese cuerpo que debe reemplazarla no debe ser determinado por la comision sino por el Congreso; lo demas seria extralimitarse, porque ningun artículo de la ley de elecciones le dá á la Comision tal facultad, sino únicamente la de regular los votos de la eleccion de Senadores, y proclamar á los que lo hayan sido; y la proclamacion de los Senadores es una cosa distinta de mandar la instalacion de las municipalidades.

Desde luego hecha la proclamacion se sabrá cual es el colegio que deba subsistir y cual no; pero esto no es bastante para que diga la Comision desde luego que tal Municipalidad deba instalarse el 1º de Enero próximo.

El señor Arenas.

Los señores que acaban de hablar han dicho que la Comision Permanente no tiene facultad para resolver esta cuestion; y sin embargo el dictámen la resuelve, porque establece que continúen las mismas municipalidades; lo que es en mi concepto resolver la cuestion.

Yo creo que lo que debe hacerse, es devolver la consulta al gobierno diciendole que no está en las facultades de la comision resolver esta cuestion, para que él proceda conforme á la ley.

Desde luego se nota que hay un vacío en la ley, vacío que nosotros no podemos llenar, y que llenará el Congreso cuando se reuna.

Si es cuestion, de emitir opiniones, emitiré tambien yo una distinta: diré que el gobierno instale las municipalidades elejidas por los colegios que funcionaron en el local designado por la ley.

Como veo que se resuelve este punto en el dictámen; y como nosotros no tenemos facultad

para resolverlo, estoy en contra del dictámen.

El señor *Chavez*.

Si se devolviese al Ejecutivo su nota, como opina el señor Arenas, sin dictámen ninguno, ¿a cuáles de las 40 ó 50 municipalidades que hay dualistas instalaba el gobierno el 19 de Enero?

La opinion de preferir á las que funcionaron en los locales designados por la ley, no es aceptable, porque tambien bandidos se han apoderado de esos locales, y se dirá por eso, que los que funcionaron en ellos constituyen el colegio legal, y que los otros colegios que han funcionado en los locales designados por los Sub-prefectos, que son la autoridad á quien la ley encarga designarlos, se les tendrá por nulos, se les mandará á la cárcel?

Hay 80 colegios electorales y de los 80, 50 están en ese caso; y yo he visto actas, como que las he recibido todas, en que el Sub-prefecto dice, que no obstante haber señalado un local, por haberse apoderado de él á la fuerza personas extrañas, ha tenido que señalar otro para que funcionara el colegio verdadero.

Creo que, procediendo por analogía, se debe mandar que funcionen las actuales municipalidades hasta que legalmente se declare cuales son las que deben reemplazarlas; lo que sucederá dentro de poco, cuando proclame los Senadores la Comision; y creo ademas que debe resolverse este punto, en el dia para evitar conflictos que pudieran traer funestas consecuencias.

El señor *Arenas*.

Yo no he hablado en la hipotesis de que la comision pudiera resolver este asunto, porque creo que no puede resolverlo.

Si hay faltas en la ley, el gobierno debe ver lo que hace: nosotros no podemos asumir una responsabilidad que no nos corresponde.

El señor *Delgado*.

El señor Cardenas dice que el dictámen no tiene parte resolutiva: soy de opinion contraria. Es verdad que en la parte razonada del dictámen se hace una indicacion que no considero prudente; pero esa parte no se discute sino la parte resolutiva que es la que se vota.

El señor *Cárdenas*.

Lo que se está discutiendo es todo el informe, porque el señor Zarate pide que se trascriba al gobierno: lo que quiere decir que vamos á aceptar ó rechazar todas las opiniones emitidas por el señor Zarate en su informe. Como entiendo así la cuestion, es que he impugnado una de esas opiniones, la que se sienta que la comision tiene facultad para resolver la consulta. En mi concepto no tiene tal facultad: no somos cuerpo consultivo, nunca absolvemos dudas, tampoco somos cuerpo deliberante: nunca mandamos.

Lo que hice antes de ahora fué manifestar mi opinion particular sobre cual debé ser la conducta del Gobierno respecto de las actas de Senadores: en mi concepto la conducta que debe seguir percibe claramente; pero ahora el señor Zarate avanzado mas emitiendo otra opinion: ha dicho que la comision del cuerpo legislativo no tiene facultad para juzgar las actas electorales de las provincias. Tambien en esta parte estamos encontrados en opiniones. En mi concepto este cuerpo tiene facultad legal para juzgar los procesos electorales de todas las provincias en que se ha elegido Senadores; y

á las Camaras, segun un artículo de la ley, compete calificar el personal. Nosotros somos como un Tribunal de 2ª Instancia en materia de elecciones: los colegios son el Tribunal de 1ª Instancia. El Congreso aceptará ó rechazará nuestro fallo; pero no por eso es menos cierta nuestra competencia para fallar en todo lo relativo á la eleccion de Senadores. Ahora bien, dado este fallo por nosotros, conforme á la ley los hechos de los colegios que aprobamos son legales y las municipalidades que hayan elegido deben entrar en el próximo periodo á funcionar reemplazando á las presentes.

El señor *Zarate*.

Muy bien dice el señor Cárdenas, que se discute todo el informe y no la parte dispositiva. Basta para convencerse de ello ver que el informe contiene una refutacion de la nota del ministerio. El ministerio pide que este cuerpo absuelva el conflicto en que se encuentra, y que en su virtud resuelva lo que estime conveniente dando una resolucion cualquiera. Partiendo de esta base, la comision especial ha dicho que no puede tener lugar esa resolucion, por las razones que contiene el informe.

Con respecto á la otra opinion, realmente estamos encontrados con su Señoría: yo creo que terminantemente la ley de elecciones facultá á la Comision para hacer la regulacion y escrutinio de los votos para Senadores; y caso de que no haya eleccion, para hacerla; pero otro artículo anterior dice que á las Cámaras legislativas compete únicamente decidir sobre la validez ó nulidad de las elecciones; las Cámaras pues son las únicas competentes para decidir sobre esas elecciones.

La ley no se ha puesto en el caso de colegios duales. En hora buena que fallemos en 2ª Instancia lo que los colegios fallaron en la, cuando no hay dualidad; pero hoy no puede suceder así, porque hay dualidad y hay que fallar sobre cual de los dos colegios es legal. Nosotros vamos á juzgar no de los procedimientos de un colegio provincial, sino de los colegios provinciales mismos: vamos á declarar cual de los colegios es valido y cual nulo; y esta declaratoria no nos compete á nosotros.

El señor *Santisteban*.

Mi opinion es contraria á la del señor Zarate en cuanto á las facultades de la Comision.

El que tiene poder para lo mas, tiene poder para lo menos. La comision tiene poder especial, expreso y determinado en la ley, para hacer el escrutinio y regulacion de todos los actos electorales de Senadores; y el escrutinio no se puede hacer sino resolviendo cual de los actos es valido y cual no lo es. Aun respecto de los contadores que van á hacer una liquidacion, es necesario concederles la facultad de calificar las partidas que van á considerar. Y no es una simple operacion aritmética la que tiene que hacer la Comision, sino que es una operacion política la del escrutinio y la regulacion de votos; y los escrutinios de actas son el examen de ellas, para ver donde está la legalidad y donde los vicios de ellas; no es simplemente contar votos; y aduzco en apoyo de mi opinion, el hecho terminante practicado por la comision en la eleccion de 29 Vice-Presidente: textualmente son las mismas las palabras con que la ley encomendó á la comision el examen de esas actas: "la comision hará la regu-

lacion y escrutinio de votos; y la comision examinó la validez de las actas y la comision resolvió sobre esa validez y mandó enjuiciar á los que habian violado la ley. Quien tiene facultad para lo mas, es necesario que la tenga para lo menos; de otro modo seriamos una maquina; y de ese modo mejor seria que quedasen las actas allí. Por mi parte lo declaro así: no quiero ser maquina, quiero ser inteligente; y por lo mismo deseo que el señor Zarate modifique su dictámen en términos que puedan continuar las actuales municipalidades hasta que la comision resuelva cuales son los colegios legales.

Deben continuar las municipalidades actuales, porque ninguna autoridad debe dejar su puesto mientras no esté legalmente reemplazada. Este es un principio legal: siempre el que cesa en un puesto aguarda el relevo, cualquiera que sea el ramo de la administracion á que ese puesto corresponda. Es un principio de derecho administrativo que no puede haber caso de vacancia. Si no se sabe cuales son las personas que han de sustituir á los municipales que deben cesar, estos tienen que continuar hasta que se resuelva esta cuestion; y esa resolucion, nos apresuraremos á darla y á comunicar al público.

Deben continuar, ademas por otra razon, por que la renovacion debe hacerse en 19 de Enero; y por mucho que trabajemos ahora, es físicamente imposible que puedan resolverse todas las dualidades, porque las actas electorales no han llegado en su totalidad; y no podemos consagrarnos á una sesion permanente, como lo manda la ley, sin tener todos los documentos para proceder sin interrupcion. Es indispensable aguardar á que vengan todos los documentos, que no sabemos cuando llegarán; pero aunque vengan pronto, la comision tiene necesidad de hacer un examen imparcial y consensado de ellos; y esto demanda tiempo y trabajo. La comision nunca puede presentar un dictámen de hoy á mañana; tendrá que mastcarlo; de suerte que la resolucion se dará dentro de 10 ó doce dias, cuando sea imposible se instalen en el término prefijado, porque hay muchas provincias donde se sufre el mal de la dualidad que deploramos en Lima.

Ha dicho el señor Zarate que los actos electorales son distintos: que la eleccion de Senadores es distinta de la de municipales. Cierto. Nosotros no vamos á juzgar la eleccion de municipales y diputados; lo que vamos á juzgar, es la eleccion de Senadores, los actos electorales relativos á la eleccion de Senadores; pero esta eleccion se ha hecho por un colegio ó por dos ó mas; y he aquí por qué nuestra resolucion llevará implícita la nulidad de tal ó cual colegio. Puede ser ademas que haya nulidad en la eleccion de municipales: entonces quiere decir, que á pesar de ser el colegio legitimo la eleccion de municipales no debe aprobarse; lo que es cosa distinta. Me explicaré mas claramente: puede ser que un colegio legitimo haya hecho una eleccion legitima; pero puede ser que el vicio no esté en el colegio sino en el personal elegido; así, si un colegio legitimo viola la ley en el acto de elegir á un Senador ó Diputado que esté impedido de serlo, entonces la eleccion se vicia no por vicio del cuerpo sino por el del funcionario que se elije; es decir que el organo está bueno y que la funcion es la mala. No se han observado las fórmulas prescriptas por la ley; luego el acto es nulo, sea que se

refiera á un Diputado, á un Senador, á un municipal; y puede ser que los actos relativos á los diputados sean malos y los de los Senadores buenos, suponiendo la legalidad del colegio; porque suponiendo esta legalidad, puede ser que los actos no tengan los requisitos legales. El colegio que elije á un diputado que no tiene mas que 20 años puede ser un colegio legal; y sin embargo la eleccion ha recaido sobre una persona que tiene tacha, por no tener la edad. Hé aquí que, aunque los actos son distintos, emanan de un solo organo y de la bondad ó malicia de este organo, es de lo que vamos á conocer.

Una vez resuelto por la Comision Permanente que tal colegio es legitimo, el Gobierno, si no tiene datos ciertos en contra de la eleccion que ellos hayan hecho de municipalidades, procederá á instalarlas. Mas, si otra es nuestra conducta ponemos al Gobierno en la necesidad de proceder por sí á declarar que una Municipalidad sea instalada y no otra; lo que es ponerlo en el caso de faltar á la ley; es decir nosotros desharemos lo que hizo la Comision Permanente anterior, porque se recordará que cuando el Gobierno mandó instalar una de las municipalidades duales en el periodo anterior, la Comision Permanente le hizo una representacion; y si nosotros procedemos ahora del mismo modo ¿qué hará el Gobierno? ¿no dirá con razon: cual es la linea de conducta que debo observar, si cuando procedo por mí á reconocer tal Municipalidad, de las que han sido duales, se me representa como infractor de la ley; y, si cuando pregunto como debo proceder en ese conflicto, nada se me contesta? ¿qué es lo que hago ahora? La observacion será juiciosa y dañará nuestra propia reputacion. Si el Gobierno fuera á tomar como nota distintiva de la legalidad los colegios el haber funcionado en los locales designados, para calificarlos de legales y declararlos como tales, se espondria á violar la ley; por que ni la circunstancia del pliego en blanco, ni la del tiempo, ni la del lugar, son esenciales para constituir la bondad ó malicia de los actos electorales. Puede un colegio funcionar en el sitio designado sin que sus actos sean legitimos, porque pueden haberse reunido allí individuos que no hayan sido electores, que no por reunirse en ese sitio se han de titular tales. Es pues muy expuesto el juzgar por circunstancias de esta especie de la bondad de una eleccion.

Por todo lo expuesto, y conociendo la necesidad y la urgencia de absolver, aunque sea indirectamente este asunto, entiendo que debemos decir nuestra opinion, porque no podemos dejar sin respuesta la nota que se nos ha pasado; por consiguiente deseo que se modifique el dictámen en el sentido, de que es la opinion de la Comision Permanente, que las corporaciones municipales actuales deben continuar hasta que ella resuelva cuales son los colegios legitimos. En estos términos estará porque se apruebe el dictámen.

El señor Zarate.

Yo accedería gustoso á la observacion del señor Silva Santisteban, que parece juiciosa á primera vista, si no se fijara en los términos de la nota del Ministro que motiva este dictámen: dice así [leyó]. Lo que quiere el Gobierno es que esta corporacion resuelva lo que estime por conveniente sobre cual de las municipalidades debe ser instalada en

19 de Enero, ó si ninguna de ellas debe serlo. Se dirige esclusivamente la nota á las elecciones de municipales y nada mas; y en las elecciones de municipales, no puede conocer ni decidir la Comision Permanente, porque, si bien la ley de elecciones le dá facultad para hacer la regulacion de votos de la eleccion de Senadores, esto no quiere decir que hecha la proclamacion de Senadores han de quedar validos los actos posteriores de los colegios, que son procedimientos distintos, como muy bien lo ha explicado el señor Santisteban; porque bien puede suceder que el colegio cuya eleccion de Senadores ha sido aprobada por la comision, haya faltado á ciertos trámites en la eleccion de municipales; y por consiguiente, no puede aceptarse la indicacion de que quedarán instaladas las municipalidades nombradas por los colegios cuyas elecciones de Senadores hubiesen sido aprobadas.

El conocimiento y la decision sobre elecciones pertenece á las Cámaras, no á la Comision; mucho mas cuando ahora se trata de la eleccion de municipales sin relacion ninguna con la de Senadores. La razon de que quien puede lo mas puede lo menos, es un sofisma: nuestro padre Adan podia lo mas y sin embargo no podia lo menos: podia comer de toda fruta, menos de la que le estaba prohibida ¿por qué? porque tenia prohibicion especial; con que quien puede lo mas, no siempre puede lo menos.

El señor *Santisteban*.

El señor Zarate ha creido que yo he propuesto que tan luego como la Comision declare cual es la eleccion lejitima, haya de instalarse la Municipalidad de este colegio. No he propuesto eso. Al contrario, digo que continúen las actuales municipales hasta que se resuelva cual es la legal de las duales. Si despues hay algun inconveniente, ya sabrá el Gobierno á que atenerse; es decir que si resultan algunas observaciones particulares respecto á la eleccion de municipales, ó falta de requisitos legales en esa eleccion, el Gobierno sabrá lo que debe hacer. Yo lo que deseo es que no se renueven actualmente.

En cuanto á lo demas, no estamos en escuela para contestar la observacion del señor Zarate; pero me bastará indicar que precisamente en ese caso de autorizacion especial está la Comision Permanente, y siempre lo especial es eluye lo general. Si me he valido de las palabras, quien puede lo mas puede lo menos, ha sido por acomodarme al modo general de hablar: la palabra es, que quien tiene obligacion de practicar un acto, tiene derecho de exigir los medios necesarios, porque el fin presupone la posibilidad de los medios. Aquella facultad de las Cámaras, permitáseme decirlo, yo he sido quien ha redactado esa ley, esa facultad se ha puesto por corregir la omnipotencia que querian arrogarse los colegios electorales; porque antes se estaba en la persuasion de que las actas terminaban con la resolucion del colegio provincial; y ese abuso de los colegios, es el que viene á combatir la ley, permitiendo que se pongan en el acta todas las indicaciones que tengan por conveniente los electores. La Comision Permanente no es sino el cuerpo legislativo representado de cierto modo: la Comision ejerce funciones que espresamente le ha delegado el cuerpo legislativo; y esas funciones pueden ejercerse directa ó indirectamente. Esa de-

legacion espresa es la que le dá competencia, como se la dió á la Comision anterior, para resolver en la eleccion del 29 Vice-Presidente.

En seguida el señor Zarate convino en retirar su dictámen para reconsiderarlo.

Se puso en debate el siguiente dictámen.

Señor:

D. Sebastian Destre ha pedido que la Comision Lejislativa dirija al Poder Ejecutivo la correspondiente representacion para que remueva al señor D. Bernardo Bermudez de la Prefectura del departamento de Junin, por haber cumplido su periodo constitucional.

El gobierno ha informado sobre este particular, diciendo que en el mes de Mayo del presente año habia hecho igual solicitud ante el gobierno el mismo D. Sebastian Destre, pidiendo ademas que se mandase sujetar á juicio al Coronel Bermudez por varias faltas graves, de que lo acusaba, en el ejercicio de su cargo:—que tanto de los informes que dieron los principales empleados y funcionarios públicos de Junin, cuanto de ciertas copias autenticas mandadas agregar al expediente de la materia, habian resultado falsos los capitulos de la acusacion, y que antes bien se habia comprobado que el Coronel Bermudez, al remitir á Destre á disposicion del poder judicial, como falsificador, vago, y mal entendido con varias acusaciones pendientes, se habia limitado á ejercer atribuciones concedidas por la Constitucion y las leyes:—que el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, habia opinado, en vista de los comprobantes referidos, que la solicitud de Destre era inadmisibile bajo sus dos aspectos; y que en conclusion, el gobierno, haciendo uso de sus facultades legales, tenia á bien conservar en la Prefectura de Junin al Coronel Bermudez por la confianza que le inspiraban su patriotismo y acreditado celo por todo cuanto tenia relacion con el bien públicos.

Despues de este informe circunstanciado, documentado con el adjunto expediente, solo hay que averiguar, si la Comision Lejislativa podrá dirigir constitucionalmente al Ejecutivo la representacion que pide D. Sebastian Destre, por estar el Coronel Bermudez mas de dos años desempeñando la Prefectura de Junin.

La Constitucion de 1856, decia en el artículo 101, que la duracion de los Prefectos y Sub-Prefectos seria de dos años, y en el 102, que las atribuciones de estos funcionarios, y el modo de hacer efectiva su responsabilidad, se detallarian por una ley; disponiendose ademas en el artículo 11, que no podrian ejercer el mismo empleo, ni otro alguno, mientras no fueran absueltos en el juicio de residencia, al que deberia sujetarse luego que cesasen en el cargo.

El Congreso del año 60 cumpliendo con la mision que recibió de los pueblos, reformó la Constitucion de 1856, y la reforma recayó cabalmente, entre otros artículos, sobre los tres que se acaban de mencionar.

Los dos primeros articulos fueron sustituidos con los artículos 115 y 116 de la Constitucion reformada; es decir, que cuando por la primera Constitucion, los Prefectos y Sub-Prefectos debian ser nombrados por el Gobierno á propuesta en terna doble de las juntas departamentales, por la segunda, es regalía del Poder Ejecutivo nombrarlos sin

necesidad de propuesta; y cuando aquella determinaba la duracion de estos funcionarios, fijando dos años, esta última la reservó para fijarla en una ley secundaria.

El artículo 11 de la 1.ª Constitución tambien sufrió su reforma, haciendo á los empleados públicos directa é inmediatamente responsables por los actos que practiquen en el ejercicio de sus funciones, en vez de sujetarlos, como lo disponia aquella, al juicio de residencia, al cesar en sus cargos.

DEDÍCISE de la genuina comparacion de ambas Constituciones, que aquellos que desempeñaron las Prefecturas y Sub-Prefecturas bajo el imperio de la 1.ª dada por la Convencion Nacional, estuvieron sujetos al periodo constitucional de dos años; mientras que no lo estan estos mismos funcionarios bajo el regimen de la 2.ª, pues segun el artículo 115 tiene el Ejecutivo la prerrogativa de nombrarlos, removerlos y reelejirlos sin infringir ninguna ley.

Se hace, pues, indispensable notar aquí, que tanto la Convencion Nacional, como el Congreso reformador del 60 han sido consecuentes con sus respectivos principios sentados en el artículo 11 de las dos constituciones, al señalarse en una el periodo de dos años, y al librarlo en la otra á una ley posterior, que no se ha dado. Desde que los convencionales aplazaron en su artículo 11 la responsabilidad de los funcionarios políticos para el juicio de residencia, *después de cesar en el cargo*, tuvieron necesariamente que fijar en la misma Constitución, como maximo de duracion, el término de dos años, pues de otro modo, su responsabilidad seria ilusoria, no divisandose nunca el dia de poderse hacer efectiva; mientras que, los legisladores del 60 dispusieron que esa responsabilidad fuese directa é inmediata por los actos que practicáran en el ejercicio de sus funciones; de suerte que, D. Sebastian Destre, en vez de dirigirse al Gobierno, y á la Comision Lejislativa acusando al Coronel Bermudez de faltas como Prefecto de Junin, y pidiendo su remocion, debió hacerlo directamente ante la Corte Superior de Justicia conforme al inciso 1.º del artículo 5.º del Código de Enjuiciamientos en materia penal.

Si así hubiera procedido, y hubiera llegado á comprobar sus faltas, ya estaria separado de la Prefectura el Coronel Bermudez, por providencia judicial; y el gobierno, cumpliendo entonces con la atribucion 8.ª del artículo 94 de la Constitución, se habria visto en el caso de nombrar otro Prefecto, que conviniera al buen servicio del Departamento de Junin. Por estas consideraciones, y muy especialmente porque con la conservacion del Coronel Bermudez en aquella Prefectura no se infrinje ningun artículo de la Constitución vigente:

Vuestra comision especial es de dictámen, que declareis sin lugar la solicitud del ciudadano D. Sebastian Destre.

Dése cuenta.—Sala de la comision.—Lima, Diciembre 11 de 1863.

J. de la C. Lizarraga.

El señor Cárdenas.

La cuestion para mi está reducida á saber: si rije el artículo de la ley orgánica de autoridades políticas q' fija como máximo para el desempeño de las Prefecturas y Subprefecturas el término de dos años. Si está vigente ese artículo, la solicitud es ad-

misible, dado caso que se pruebe que el Prefecto de Junin ejerce la autoridad mas de dos años; si no está vigente ese artículo, no es legal la representacion. En mi concepto está vigente: no está derogada

El señor Lizarraga.

En el cuerpo del dictámen que acaba de leerse esta anticipada la contestacion que debo dar al Honorable señor Cárdenas: de otra manera, el dictámen habria estado reducido á muy pocas palabras.

La convencion Nacional fijó en su Constitución del año 56, el principio de que los funcionarios políticos solo durarian dos años, y no quiso que este periodo se librara á una ley secundaria, como lo quiso y ordenó el Congreso del 60 en su Constitución. Ciertamente es que en la ley orgánica, á que alude el señor Cárdenas existia tambien un artículo que fijaba el término de dos años para las Prefecturas y Subprefecturas, pero debe saberse que ese artículo no era mas que una copia fiel de lo que disponia un artículo de la Constitución, copia que sin duda la admitió la Asamblea Lejislativa en la ley secundaria, por distraccion, pues aquel periodo estaba ya fijado en la ley fundamental.—Y no podia ser de otra suerte, desde que, por la Constitución convencional se estableció el principio de la alternabilidad para todos los empleados de la administracion pública, incluyendose aún á los del Poder Judicial; razon por la que se fija constitucionalmente un periodo señalado para los empleados.—Vino la reforma del año 60 y echó por tierra precisamente el principio absoluto de alternabilidad, reduciendolo á lo que era antes de reunida la Convencion Nacional; y ordenó, que la duracion de los Prefectos se designaria por una nueva ley, ley que hasta ahora no se ha dado; y de consiguiente, solo ha quedado en pié, sobre este particular, el artículo 115 de la Constitución, por el cual, tiene el Ejecutivo la regia de nombrar á los Prefectos, removerlos, y reelejirlos. Esto, en cuanto á la comparacion de los artículos constitucionales, que, en cuanto á su filosofia, no puede ocultarse á la ilustracion del señor Cárdenas, que el espíritu de la reforma en esta parte, fué, de que los funcionarios políticos fuesen inmediatamente y directamente responsables por el ejercicio de sus funciones; mientras que por la primitiva Constitución, la responsabilidad quedaba aplazada para el juicio de residencia.—No hay pues, segun la ley vigente fundamental del Estado, necesidad de periodo para hacer cesar á un Prefecto de su cargo: al dia siguiente de recibirse, si comete una falta, puede ser acusado ante su juez respectivo, y hacerlo bajar del puesto, si se le comprueba su delito. Esta es la verdadera filosofia de la ley, y conforme á ella, seria un absurdo suponer vigente el artículo de la ley secundaria á que alude el señor Cárdenas.

El señor Cardenas.

Las leyes no se derogan por deducciones filosoficas sido por otras leyes. No acepto pues la teoria del señor Lizarraga para aplicarla á la ley orgánica de funcionarios públicos. Lo que derogó el artículo constitucional á que su Señoría alude, fué otro artículo constitucional, en el cual habia algo de fundamental, que debia existir en la Carta, y algo que no tiene este caracter y que debe ser establecido

en las leyes comunes. La duracion de los funcionarios políticos precisamente pertenece á este segundo orden; es una circunstancia ó condicion que no debe prescribirse en la ley fundamental, sino en en la ley organica, para que pueda ser modificada ó derogada, segun convenga en las diferentes circunstancias que atraviase la República; lo cual no se hace, como ahora se pretende por meras deducciones. Cita su Señoría ejemplos y le contesto con ejemplos. Otro artículo constitucional hay, redactado poco mas ó menos en los mismos términos, respecto del Consejo de Ministros. La ley de Ministros no se dió cuando se sancionó la Constitucion ¿y qué resultó quedó derogada la antigua ley organica de Ministros? No: estuvo vigente despues el periodo de dos años. Y estan redactados ambos artículos, el referente al Consejo de Ministros y el que hace relacion á los funcionarios políticos, sobre poco mas ó menos en los mismos términos; en ambos se usa el verbo en futuro, con relacion á la ley organica.

La letra del artículo constitucional se refiere á la ley organica de funcionarios políticos, todo lo que la ley fundamental no puede detallar, como por ejemplo, la duracion de los Prefectos. Que en la mente del Congreso reformador entrase dar mas amplitud al Gobierno, en la esfera administrativa, en cuanto al nombramiento y remocion de funcionarios políticos, concedo. Que ese mismo Congreso abrogase mas tarde, conforme al espíritu de la Constitucion reformada, el artículo de la ley organica que fija dos años de plazo para esos funcionarios, tambien lo concedo. Pero, mientras la ley este vigente es preciso cumplirla: hay Prefectos que tienen mas de dos años; pues abajo esos Prefectos. ¿Es mala la ley? Apresurese el Gobierno, apresuremonos nosotros en la próxima legislatura, á pedir su reforma, ya que no lo hicimos antes. Muy grave y trascendental es admitir en política el principio que se acaba de enunciar, de la derogacion de leyes por deducciones filosóficas. Las leyes, que deben ser siempre claras, terminantes y espresas, se derogan por otras leyes claras, terminantes y espresas, de una manera implicita ó explicitamente. Se derogan implicitamente, cuando la ley nueva es contraria á las leyes existentes, lo que no sucede en el presente caso. Asi, no podemos decir que la derogacion de un artículo constitucional envuelve, implicitamente, la derogacion de una ley organica, que lejos de ser contraria, está en armonía con la Constitucion, como sucede con el artículo citado que prescribe cierta duracion para los funcionarios políticos. ¿Mala es esa ley? pues que se cumpla. Cumpliendo las leyes, malas ó buenas que sean, se salvará la República de las desgracias que la tienen abatida.

El señor Lizárraga.

Se me permitirá hacer una aclaracion.—Yo no he dicho que la ley secundaria de funcionarios políticos dada por la Convencion Nacional esté en el todo derogada: lo que he dicho, y sostendré siempre, es, que algunos de sus artículos que están en pugna con los principios constitucionales de la Constitucion reformada, no existen, porque una ley secundaria queda implicitamente derogada con otra contraria fundamental: esto es de derecho.—La reforma no señala término para la responsabilidad de los funcionarios, no me causará de repetirlos;

la reforma en este orden, ha dado un paso mas adelante que la Convencion; para la reforma no hay juicio de residencia, no hay espera; es instantánea la responsabilidad; así es que si Destre hubiera sido bien dirigido, y tuviera cómo comprobar las faltas del Prefecto de Junin, ya lo habria hecho descender del puesto por ministerio de la ley.

El señor Zárate.

Deseo saber si el señor Lizárraga ha pedido informe al gobierno; por que, si realmente es terminante el artículo de la ley que prescribe que la duracion de los funcionarios políticos sea de dos años, por otro artículo se le faculta al gobierno para que pueda reelejirlos nombrandolos nuevamente.

El señor Santisteban.

Señor: dos principios hay que considerar en el precepto Constitucional del 56: la duracion fija y terminante de los funcionarios publicos; y la necesidad de ser sometidos á juicio de responsabilidad inmediatamente despues de haber casado, con prohibicion de continuar en ese cargo ú otro alguno si no es absuelto.

Habiendose establecido por el artículo Constitucional que los Prefectos y Subprefectos debian durar tal tiempo, la ley organica reprodujo ese mismo principio estableciendo espresamente la sesacion de ese funcionario; por que no podia ser de otro modo, desde el momento que no puede seguir en su puesto sin estar absuelto en el juicio de residencia. Mas, desde que desapareció la necesidad de la residencia, aquella ley quedaba sin sentido; esa duracion fijará un absurdo.

Apenas se habia promulgado la Constitucion del 56, cuando yo, uno de sus mas decididos partidarios, publiqué un curso de derecho constitucional atacando precisamente ese principio establecido en aquella ley de que se nombrara los Prefectos y Subprefectos á propuesta de las juntas departamentales y que designaba la duracion de los funcionarios, que debia terminar con el juicio de residencia. Si en la Constitucion vigente está la facultad del gobierno para remover á los Prefectos y Subprefectos ¿que significado tiene la duracion de dos años? quiere decir que esos funcionarios no tienen nada favorable y mucho adverso: ellos pueden ser removidos á la hora que quiera el gobierno, pero no pueden continuar por mas que él lo desee. Los derechos y las obligaciones tienen que ser correlativos: si se establece que precisamente han cesado los Prefectos al concluir el término de dos años, debe establecerse que no pueden ser removidos durante ese periodo; y si se establece lo contrario, debe establecerse tambien que pueden continuar cuando el gobierno lo quiera.

Ahora es necesario remontarse al espíritu de la ley y ver sus fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de esa institucion? Los Prefectos son funcionarios subalternos del Poder Ejecutivo y ellos son los que deben responder al gobierno del orden público en su respectiva division territorial. Desde que el gobierno está en la obligacion de conservar el orden, tiene derecho de nombrar á su satisfaccion á los empleados de su dependencia y tiene el derecho de removerlos ó hacerlos continuar cuando lo crea conveniente. No es ésta una simple deducion filosófica, es una razon científica, es una razon de alta conveniencia social. Si el gobierno no puede remover á un funcionario durante cierto periodo,

no puede responder del orden público: si no lo elige á su satisfaccion tampoco puede responder de la conservacion de ese orden; y si no puede hacerlos continuar ¿cual es la garantia que tiene de ser bien servido? Los señores que discutan sobre este particular no pueden menos que reconocer la justicia con que se otorgó al gobierno, por la Constitucion del 69, la facultad de remover á los funcionarios de su dependencia; pero se dice que hay necesidad de un nuevo nombramiento para que el funcionario continúe despues del periodo de dos años. La razon es mas aparente que sólida. Hace algun tiempo se promovió esta misma cuestion pidiendo la remocion de ciertos funcionarios: el gobierno exigió que se dijese si habia una causa para la remocion ademas de la que se aducia del cumplimiento del tiempo. No habia otra; y entonces el gobierno dijo que continuasen, y que se tuviese por regla general que no removiendo á los funcionarios politicos despues de terminado su periodo, se entendiese que tacitamente los nombra de nuevo.

¿Un nuevo nombramiento! ¿qué significa nombrar al q' está en el empleo para qué se le nombra? Eso es inútil, es una formalidad inoficiosa; si está ejerciendo esas funciones ¿qué necesidad tiene de un nuevo nombramiento? El nombramiento es para que entre en ejercicio del cargo; pero desde que está funcionando y desde que el gobierno declara que cuando no lo remueve es por que quiere que continúe; y si continua realmente ¿para qué el tal nuevo nombramiento? ¿no es este una farsa?

La ley orgánica de la Convencion fué espedita en cumplimiento del artículo constitucional; y desde que ese artículo desapareció, desapareció también la ley espedita en su consecuencia; y mientras no sea debidamente reformada, no puede adoptarse, sino como medida de buen gobierno, en todo aquello que no choque con los principios establecidos por la Constitucion; pero en el caso presente ese artículo de la ley de funcionarios politicos choca con los principios de la Constitucion, por que la Constitucion ha derogado el juicio de residencia; y choca ademas, por que la Constitucion dice que los funcionarios pueden ser nombrados por el gobierno. Yo creo por lo tanto que el dictámen está razonado y que debe aprobarse su parte dispositiva, que es conforme á la Constitucion y conforme á los principios de la ciencia administrativa.

El señor Cárdenas.

El señor Silva Santisteban cree que á juicio del Poder Ejecutivo puede removerse á los Prefectos, y en esta parte padece de una equivocacion.—Se remueven conforme á la ley, no á arbitrio del gobierno. El artículo 115 dice (ley6) se hace mucha fuerza en los términos de esta ley, para darla mayor al argumento del dictámen.

El artículo 116 de la Constitucion dice: (ley6). Porque se ha usado aquí del verbo en futuro, deducen algunos señores que la ley orgánica de funcionarios politicos quedaba derogada y que era preciso dar otra nueva ley. Este argumento lo he combatido citando otro artículo constitucional redactado del mismo modo, y que sin embargo no derogó en concepto del Congreso la ley orgánica de Ministros. Voy á leer uno de los artículos, el 97 (ley6). Se designaran, dice, en futuro; y sin embargo la ley anterior quedó vigente, no se deroga-

gó con este artículo, por que no es esta la manera de derogar las leyes orgánicas. Las deducciones filosóficas, ó las razones científicas ó de conveniencia social, no derogan las leyes. Las leyes se derogan con otras leyes: este es principio de derecho universal. Vease aquí como dice la Constitucion que la ley dictaminará ó designará las funciones del Consejo de Ministros, y sin embargo quedó vigente la ley; así como tambien quedó vigente la ley orgánica de funcionarios politicos, apesar del artículo constitucional que se alega. Todas las razones aducidas por el señor Silva Santisteban serán buenas para derogar la ley, pero no son razones para darla por derogada. Será preciso como ha dicho S. S. poner mas en armonía la ley orgánica dictada antes de la Constitucion, con el espíritu de esta; pero mala ó buena, está vigente, y debe cumplirse. Lo repetiré una y mil veces, por que quiero por tema tener mientras ser hombre público: mala ó buena la ley, que se cumpla.

El señor Lizárraga.

Ya que el Honorable señor Cárdenas en su segunda argumentacion se ha valido de los terminos gramaticales del artículo constitucional, voy á retorcérle el argumento con sus mismas armas. El artículo 116 dice, las atribuciones de estos funcionarios, y su duracion, serán determinadas por una ley; al sancionarse este artículo, existia el periodo de los Prefectos consignado tanto en la Constitucion del 56, como en su ley orgánica, y no obstante estas dos prescripciones, dijo el Congreso, la duracion de los funcionarios politicos la dará mas tarde: luego por voluntad, por mandato espreso del Legislador, se rayaron las dos disposiciones anteriores sobre periodo, y quedó solo vigente el artículo 115 de la reforma, segun el cual no hay duracion señalada; y no habiendola, debemos estar al principio general sentado en la Constitucion, que es el de la responsabilidad diaria, instantánea de los empleados públicos.

El señor Cárdenas.

Permítame V. E. hacer una aclaracion. El mismo artículo que cita el señor Lizárraga es contrario precisamente á su opinion; por que lo que Su Señoría y el señor Santisteban sostienen, es el principio de que el gobierno tiene la facultad de nombrar, remover y conservar á su arbitrio, las autoridades politicas; y aquí el artículo constitucional dice que la remocion se hará con arreglo á la ley; y el siguiente dice, que la duracion de estos funcionarios será determinada por la ley.—El espíritu del legislador fué quitar de la Constitucion, que es una ley permanente, fundamental, que no se deroga tan facilmente, ni se toca á cada momento, una condicion de la ley que puede ser transitoria, pasajera, segun las epocas, y que debe conservarse así para derogarla cuando convenga en las situaciones politicas diferentes que se presentan en la República.

La Constitucion anterior limitaba á dos años la duracion de los funcionarios politicos; mas el Congreso reformador ha prescrito que ese término fatal no debe fijarse en la Constitucion sino en la ley orgánica (ley6). Se sancionó aquí como fundamental la idea de término, teniendo en consideracion que en la República, todos los mandatos son alternables, tienen término, para que todos puedan ir subiendo hasta los últimos puestos

según sus méritos y virtudes, de manera que todas las ambiciones puedan ser satisfechas; conciliando así los intereses de la República, que se aprovecha del talento y patriotismo de todos los ciudadanos capaces. ¿Cuál será ese término? según la situación de la República?—lo dirá la ley orgánica. El artículo que cita el señor Lizárraga, es pues, *contra producentem*, destruye el principio que ha sostenido de que el gobierno es arbitrio de nombrar los Prefectos, removerlos cuando le plazca, y conservarlos hasta cuando quiera, nada de lo cual puede hacer sino conforme á la ley.—Nombrar los Prefectos, conforme á la ley, los remueve conforme á la ley, y los conserva única y exclusivamente conforme á la ley. Y la ley vigente ordena que la duración sea de dos años.

El señor Santisteban.

Por mas que el señor Cárdenas se empeñe en sostener que la cuestion es grave, para mí es de poca importancia. ¿Que se pide?—que se dirija al gobierno una representacion por que un Prefecto ha cumplido su término y no puede seguir funcionando. Yo daria por cierto, concederla que por la ley vigente los funcionarios políticos deben durar dos años; pero desde que el gobierno tiene la facultad de hacerlos continuar; desde que no le está prohibido esto, es claro que la cuestion es de nombre. ¿Que avanzamos dirigiendo una representacion al gobierno? Este contestaria: ya que tengo la facultad de nombrar los Prefectos, aun cuando ese funcionario haya cumplido el término, vuelvo á nombrarlo Prefecto. Esta es una cuestion de nombre. Si el gobierno tiene la facultad de nombrar de Prefecto de Junin al señor Bermudez, ó á cualquier otro, es claro que la cuestion se reduce á decir no le mande U. el nombramiento; pero esto no merece la pena que se dirija una representacion. Estoy en favor del dictámen.

Cerrado el debate fué aprobado el dictámen por 6 votos contra 5; y en seguida se levantó la sesion.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 15 de Diciembre.

Presidencia del señor Delgado.

Se abrió la sesion á las dos de la tarde, con 14 señores, y se leyó y aprobó el acta de la anterior.

ORDEN DEL DIA.

Se puso en debate el siguiente dictámen.

Señor.

Con fecha 10 del presente se dirigió el secretario de este cuerpo al Ministerio de Hacienda pidiendole el duplicado de las actas de la eleccion de Senadores, que á su despacho debieron remitir los colegios provinciales, porque vuestra comision especial encargada de su inspeccion, sucitaba tenerlas á la vista para comenzar sus trabajos en el escrutinio y regulacion de votos que le está encomendado. El Ministerio se negó á ese pedido, contestando en la misma fecha, que la ley no le imponia esa obligacion y que ademas, se hallaba impedido de hacerlo por tener que cumplir lo dispuesto por el artículo 66 de la ley de elecciones, que le ordenaba remitir las actas directamente al Senado.

En vista de esta negativa la secretaria reiteró

su pedido, revatiendo las escusas del Ministerio y apoyandose en las disposiciones de los artículos 66 y 67 de la ley de elecciones, que detenidamente espuso en su oficio de fecha 11, el que fué contestado por el Ministerio con la insistencia en su negativa anterior, como aparece de la nota de que se dió cuenta en la sesion de ayer y sobre la que recae el siguiente dictámen.

Cierto es que el artículo 66 de la ley de elecciones impone al Ministerio la obligacion de remitir al Senado el duplicado de las actas de la eleccion de Senadores, pero es en el caso en que esta Cámara deba hacer la proclamacion como claramente se expresa en la primera parte de dicho artículo, deduciendose claramente, que cuando dicha proclamacion deba practicarse por este cuerpo conforme á lo dispuesto por el artículo 63 de la misma ley, á este es á quien el Ministerio debe remitir esas actas necesarias para ejercer esa funcion legal.

Ademas, el artículo 59 del reglamento interior de la comision legislativa dispone espresamente, que las comisiones especiales nombradas para esclarecer con su dictámen cualquier asunto sometido á su conocimiento, tienen derecho de exigir que se les remita todos los antecedentes é informes que juzguen necesarios, haciendolo por conducto del secretario de la Comision Permanente, cuando hayan de dirigirse al Poder Ejecutivo ó á la Corte Suprema. En uso pues de ese derecho, vuestra comision especial encargada de dictaminar acerca del escrutinio, regulacion de votos y proclamacion de Senadores, manifestó la necesidad en que se hallaba para comenzar sus trabajos de tener á la vista el duplicado de las actas remitidas al Ministerio, pidiendolas por medio del secretario, que es el órgano legal especialmente señalado por la segunda parte del artículo citado.

Al negarse pues el Ministerio á hacer la remision de las actas y al desconocer la atribucion legal que el secretario de este cuerpo ejercia pidiendose las, ha infringido el artículo 66 citado; por ello el que suscribe opina: que debeis dirigir la primera representacion conforme á la atribucion la. artículo 107 de la Constitucion.

Sala de la comision.—Lima 15 de Diciembre de 1863.

Manuel Pino.

El señor Dorteano.

Tenga U.S. la bondad, señor Secretario, de leer la nota del señor Ministro [se leyó.]

El señor Santisteban.

Seria de desear se diera lectura al artículo 66 de la ley de elecciones [se leyó.]

El señor Lavalle.

Cuales es el artículo en que se funda el señor Ministro para no remitir el duplicado de las actas.

El señor Secretario.

El artículo 66 de la ley que acabo de leer.

El señor Lavalle.

A mí me parece que el Ministerio no debe remitir esas actas, como cree el señor Ministro, sino en el caso que el Senado sea el encargado de hacer el escrutinio y regulacion de la eleccion de los Senadores: entonces es cuando la ley le encarga la remision; pero cuando es la comision la encargada de hacer la proclamacion, en ese caso las actas deben quedar reservadas en el Ministerio de Gobierno.